



Israel pisa el acelerador del **genocidio** palestino, mientras el **activismo** internacional lo intenta **parar**

Al inicio del verano, el 88% de la Franja de Gaza se consideraba una “zona militar” para las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), eufemismo que significaba que la población civil había sido forzada a abandonarla. Sin embargo, el pasado 8 de agosto, el Gabinete de Seguridad de Israel desveló que pensaba actuar sobre buena parte del 12% restante y aprobó una nueva fase de la Operación Carros de Gedeón, es decir, del genocidio que está perpetrando en el enclave: tomar la Ciudad de Gaza —donde viven un millón de personas— y mantener el “control” permanente de la misma.

En cumplimiento de su plan, el 20 de agosto, Benjamin Netanyahu movilizó a 60.000 reservistas —en contra incluso de la opinión de Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las FDI— y actualmente ocupa la periferia de una ciudad que está siendo sometida a intensos bombardeos. Y ello con vistas a desplazar a toda la población del norte hacia el sur y recluir a los gazatíes en campos de concentración.

Unas semanas después, *The Washington Post* filtró un plan de posguerra para la Franja de Gaza, de 38 páginas, que circula dentro de la Administración de Donald Trump. En la línea de lo que había anunciado el presidente a principios de año, contempla la reubicación de los dos millones de habitantes del enclave. Los gazatíes recibirían 5.000 dólares, un año de alimentos y cuatro años de alquiler en otros países a cambio de abandonar sus casas y ceder los derechos de explotación de su suelo a los gringos. Según su visión, Gaza pasaría a considerarse un territorio bajo control estadounidense durante un periodo de diez años y la región, en la cual se construirían entre seis y ocho ciudades inteligentes movidas por una IA, se dedicaría a la producción tecnológica (una suerte de Silicon Valley) y al turismo de lujo.

>> Pág.2

Incendios, cambio climático y capitalismo

El cambio climático ejerce un control cada vez mayor sobre la meteorología de los incendios y la superficie quemada interanual, y está cambiando progresivamente la actividad de los incendios globales. En el caso de Europa, durante las últimas décadas (1980–2020) se está produciendo un “cambio sin precedentes” en el régimen de incendios en verano y primavera que se relaciona con los efectos del calentamiento global, según concluye un estudio recién publicado en la revista científica *Scientific Reports*.

>> Pág.6

Conversaciones con una refugiada palestina (segunda parte): oscuridad y luz

“Había judíos antes del apartheid en Palestina y no había ningún problema; incluso con los que se consideraban “israelíes”. Desde luego, nuestro problema no es con su religión. Antes de 1948 teníamos muchos judíos viviendo y trabajando en Palestina. Y sé que, si eso llegara a pasar algún día, con reglas justas, creo que sería posible que ocurriera de nuevo. Muchos israelíes tienen doble nacionalidad. Si no quieren regresar a sus países de origen, entonces deberían quedarse con la nacionalidad israelí, renunciar a la otra y seguir las reglas de nuestro país palestino.”

>> Pág.8

Huelga de celo en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia • • • • 4

Denuncia de intimidación y amenaza de desalojo del E.S.L.A. EKO • • • • • 5

Hacia la abolición de las prisiones. El desafío de una justicia antipunitiva • • • • 10

Repaso de algunos casos represivos de actualidad • 12

Paralelamente a las operaciones militares en Gaza, Israel anunció el pasado 21 de agosto la aprobación de un nuevo bloque de asentamientos ilegales en Cisjordania (concretamente, 3.400 viviendas al Este de Jerusalén y cerca de Maale Adumim, otro asentamiento israelí) que, de llevarse a cabo, dividirá el territorio en dos. Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas israelí, explicó sin pelos en la lengua que con ello se eliminaría la posibilidad a futuro de un Estado Palestino.

Los planes de Trump y Netanyahu evidencian su intención de completar la limpieza étnica del pueblo palestino y de entregar la totalidad del país a los sionistas y a las empresas occidentales que sostienen su régimen colonial.

Occidente mira, pero no actúa

Incluso figuras usualmente tibias con Israel, como Emmanuel Macron (Francia), o directamente colaboracionistas del genocidio, como Friedrich Merz (Alemania), han expresado en las últimas semanas su rechazo a los brutales planes israelí y estadounidense.

Por ello, y para intentar lavar una imagen muy dañada, el mismo 21 de agosto el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí anunció que, de cara al mes de diciembre, invitará a más de 400 delegaciones internacionales (es decir, unos 5.000 participantes) al país, con el objetivo de “ayudar a difundir la narrativa israelí en los medios internacionales”, según ha informado *The Times of Israel*.

Hasta ahora, Israel solía recibir unas 25 delegaciones por año. Esto demuestra lo desesperado que está Netanyahu por cambiar la percepción de Estado paria que se ha granjeado entre la comunidad internacional.

Y es que la existencia de un genocidio es cada vez más difícil de negar. A principios de septiembre, los datos oficiales elevaron las muertes en Gaza a 64.739¹ (y a 1.000 en Cisjordania) desde el 7 de octubre de 2023. Asimismo, el 80% de las infraestructuras de Gaza habrían sido destruidas en los últimos 23 meses.

De los fallecimientos en la franja, al menos 147 se han producido por inanición, una cifra que solo puede aumentar, según Unicef y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), quienes advierten que los indicadores clave de alimentación y nutrición en Gaza ya superan los umbrales de hambruna y que “se está agotando el tiempo para poner en marcha una respuesta humanitaria a gran escala”.

Según la última alerta de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF), los niveles son los peores desde que comenzó el conflicto y dos de los tres umbrales que indican hambruna se han superado en algunas partes de la Franja. El primero de estos indicadores, el consumo de alimentos,

¹ Diferentes estudios afirman que el 80% de los palestinos muertos eran civiles y que el 70% son mujeres y niños. Los datos oficiales, además, dicen que habrían sido asesinados 217 periodistas, 120 académicos y 224 trabajadores humanitarios, incluyendo 179 empleados de la UNRWA.

se ha desplomado en Gaza desde la última actualización del CIF en mayo de 2025. Más de un tercio de la población, hasta un 39%, se pasa varios días seguidos sin comer. La desnutrición aguda es el segundo indicador y ha aumentado “a un ritmo sin precedentes”. En la ciudad de Gaza, dice el CIF, los niveles de desnutrición entre los niños y niñas menores de cinco años se han cuadruplicado en dos meses y ha alcanzado en julio el 16,5%. Más de 320.000 niños y niñas, toda la población menor de cinco años de Gaza, corre riesgo de desnutrición aguda, según PMA y Unicef. Solo en junio, más de 6.500 niños y niñas fueron ingresados para recibir tratamiento contra la desnutrición.

Frente a esta barbarie, ningún gobierno occidental está actuando de manera contundente. Por ejemplo, el 8 de septiembre, el presidente español, Pedro Sánchez, realizó una solemne comparecencia en la que llamó a las cosas por su nombre y tildó de “genocidio” lo que Israel está perpetrando en Gaza. Sin duda, no habría proferido estas palabras si no fuera por la enorme movilización social a favor del pueblo palestino.

A continuación, Sánchez anunció la aprobación de una serie de medidas destinadas a “detener el exterminio”, las cuales incluyen (1) “consolidar el embargo de armas a Israel” que se lleva produciendo “desde el 7 de octubre de 2023”, (2) prohibir que atraquen en puertos españoles barcos que transportan combustible a las FDI, (3) prohibir el tránsito por el espacio aéreo español de



armas con destino a Israel, (4) aumentar las partidas de ayuda humanitaria a Gaza, (5) la prohibición de importar productos que provengan de los territorios ocupados y (6) la limitación de servicios consulares a españoles en asentamientos ilegales.

No podemos evitar mostrar nuestro escepticismo ante afirmaciones como la de que (1) se va a “consolidar” el embargo de armas a Israel, cuando no es cierto que exista: y es que desde el mes de octubre de 2023 hasta el de marzo de 2025, España ha realizado al menos 88 exportaciones de armas por valor de 5,3 millones de euros a empresas de seguridad israelíes y ha importado al menos 36,6 millones de euros en armas y carros de combate desde Israel. Asimismo, las empresas de defensa y seguridad israelíes, sus filia-

pese a tener esta reputación, el Ejecutivo español no se atreve a romper definitivamente relaciones con Israel, lo cual habría sido una medida mucho más eficaz contra el genocidio.

Tanto en el Estado español como en el resto de países de nuestro entorno, la solidaridad con Palestina está siendo reprimida por los gobiernos, con independencia de su color. Prueba de ello son las más de 800 detenidas en el Reino Unido por expresar su apoyo al grupo ilegalizado Palestine Action, o las estudiantes detenidas y expulsadas en EEUU por acampar pacíficamente, por citar algunos ejemplos. Pese a ello, la lucha no cesa y seguimos saliendo a las calles a protestar, pedimos el boicot a empresas que colaboran con el genocidio o la ocupación, cortamos las calles al paso de la Vuelta ciclista que blanquea la limpieza étnica,

ha llegado a la costa de Gaza, pero el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha anunciado que les tratará como a terroristas. Ante esto, los estibadores de Génova, en un precioso ejemplo de solidaridad internacionalista, amenazaron con bloquear todos los envíos a Israel [13.000 contenedores al año] si se cumplen las represalias. “*Si perdemos el contacto con nuestros barcos, con nuestros compañeros, aunque sea por 20 minutos, paralizaremos toda Europa*”, declaró un estibador del Colectivo Autónomo de Estibadores (CALP) en un vídeo viral.

Unos días después, la Unión Sindical de Trabajadores Portuarios, el sindicato mayoritario del comité de empresa del puerto de Barcelona, se sumó al CALP: “*el Estado de Israel está imponiendo sobre la población de Gaza*

Tanto en el Estado español como en el resto de países de nuestro entorno, la solidaridad con Palestina está siendo reprimida por los gobiernos, con independencia de su color. Prueba de ello son las más de 800 detenidas en el Reino Unido por expresar su apoyo al grupo ilegalizado Palestine Action, o las estudiantes detenidas y expulsadas en EEUU por acampar pacíficamente.

les o terceras empresas en relación con productos israelíes han sido adjudicatarias de al menos 40 contratos de instituciones españolas por un valor de más de mil millones de euros.

Asimismo, las medidas muestran algunos resquicios importantes, como por ejemplo el hecho de que (2) aunque se prohíba que atraquen en puertos españoles barcos que transportan combustible, no se impide que transporten armas o materiales estratégicos como el acero.

Además, en cuanto al anuncio (3) de que no pasarían armas para las FDI transportadas por avión por el espacio aéreo español, la cadena SER aclaró unas horas después que esa medida no afectaría a los aviones estadounidenses que hicieran escala en las bases de Rota o Morón, como ocurrió durante la ofensiva contra Irán de hace unos meses.

Solo el pueblo salva al pueblo

A nivel internacional, el Gobierno del PSOE y Sumar se consideran uno de los Ejecutivos más implicados con la causa palestina. Es muy triste, pero es que el panorama mundial de ultraderechización no da para mucho más. Pero,

colocamos pancartas, repartimos flyers, pegamos pegatinas, etc.

Existen varios ejemplos de activistas que, ante la inacción de los Gobiernos, han tomado la iniciativa para intentar hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza y paliar los efectos de la hambruna. Por ejemplo, en junio unas 4.000 personas de 80 países distintos llevaron a cabo una Marcha a Gaza e intentaron romper el bloqueo humanitario y llegar a la frontera de Rafah con Egipto. Sin embargo, fueron brutalmente apaleadas, detenidas y/o deportadas por las autoridades egipcias.

Más recientemente, el 31 de agosto, cuatro decenas de barcos civiles partieron del puerto de Barcelona en la Global Sumund Flotilla, la flotilla más grande de la historia, y confluyeron con otras embarcaciones procedentes de Túnez en alta mar unos días después. En esta iniciativa participan 2.000 personas que provienen de más de 44 países, cargados de alimentos, leche en polvo y medicamentos. Se trata del tercer intento de romper el bloqueo por mar en lo que va de año, después de que los dos anteriores fueran asaltados por las FDI y sus tripulantes detenidas y expulsadas.

En el momento en el que escribimos estas líneas, la flotilla todavía no

aquello que la Organización de las Naciones Unidas ha calificado como «hambre provocada» y «crimen de guerra», empujando a la inanición y en la muerte una región habitada por aproximadamente 2,1 millones de personas, de las cuales el 100% sufre inseguridad alimentaria aguda y unas 641 000 ya se encuentran en situación de hambre extrema. [...] Los trabajadores portuarios, y toda la clase trabajadora de Europa en general, no podemos restar impasibles ante las guerras que se llevan a cabo con la complicidad necesaria de nuestros gobiernos, que utilizan armamento producido a nuestras fábricas y que, a través de nuestros puertos, transportan material bélico para masacrar trabajadores otras partes del mundo”.

Por ello hacen un llamamiento a apoyar a “*toda iniciativa encaminada a parar la guerra brutal e injusta que Israel está lanzando contra el pueblo palestino*”. Consideran que los trabajadores deben “*hacer todo aquello que esté en nuestras manos para defender la misión humanitaria hacia Gaza*” y declaran su “*apoyo total*” a los portuarios de Génova “*que han tomado su lugar en esta misión, poniendo en riesgo no solo sus lugares de trabajo sino también sus vidas*”.

Es una frase tan manida que suena a cliché, pero sigue siendo cierto: *solo el pueblo salva al pueblo*.

Conflictos laborales y sindicales en un abrasador verano

Huelga de celo en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

El 29 de junio, en la provincia de València, la plantilla del Consorcio Provincial de Bomberos inició una *huelga de celo*, es decir, se decidió no realizar ninguna hora extra ni asumir funciones que no estén incluidas en sus obligaciones contractuales, y, como en muchos otros sectores que funcionan gracias a la sobrecarga de las trabajadoras, esto ha implicado que turnos se quedaran vacíos y, por tanto, que, en cada turno, varios parques de la provincia se vieran afectados y se hayan visto obligados a cerrar total o parcialmente. Desde las entidades sindicales se denuncia que hay más de 250 plazas sin cubrir, además de los recortes existentes en material protector, herramientas, etc. Ni la experiencia de la DANA, ni el riesgo que suponen las altas temperaturas han servido para que las autoridades políticas valencianas reviertan el déficit presente en este servicio público.

El pasado martes 28 de julio, mientras el Consorcio Provincial se reunía en el edificio de la Beneficència, la plantilla de bomberos se concentró en sus puertas, siendo golpeados y reprimidos por la policía, dejando claro, una vez más, a quienes sirven los de azul.

Esta huelga fue interrumpida a mediados de agosto por el incendio de Teresa de Cofrentes, tras declararse el nivel 2 de la situación del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF).

Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid entre el Gobierno de Ayuso y el Gobierno central

El conflicto iniciado en el mes de julio no puede pillar de sorpresa a nadie. Desde hace meses, los bomberos forestales han convocado protestas, asambleas, paros, acciones informativas, etc., pero, ahora, decidieron ir un paso más allá y convocar una huelga que se ha prolongado durante todo el verano salvo por la pausa realizada por lo acontecido por todo el país.

Desde el pasado 15 de julio, los brigadistas están convocados a un paro para forzar tanto a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la



Comunidad de Madrid como a Tragsa, la empresa pública que gestiona este servicio externalizado por el ejecutivo regional, a negociar un nuevo convenio. El actual está caducado desde hace 17 años y, después de promesas incumplidas, las compañeras han perdido la paciencia y han iniciado este pulso ante dos entes públicos diferentes que están utilizando este conflicto para profundizar en su circo político.

A la petición de un nuevo convenio, hay otras exigencias igual de relevantes como la mejora de la seguridad, la contratación de más personal, la actualización salarial o el reconocimiento profesional.

Aunque el paro se detuvo por la ola de incendios que ha golpeado a toda la Península de forma profunda y trágica, al no haber avances ni cambios de actitud por parte de los dos organismos, al cierre de esta edición, los bomberos forestales han decidido retomar la convocatoria de huelga indefinida.

La Comunidad de Madrid, que externalizó el servicio en 1996, se ha desentendido y ha hecho como si no estuvieran teniendo lugar dichas protestas, y, cuando no ha sido así, ha sido para despreciar y faltar a los profesionales, como es práctica habitual en la señora Ayuso y en su equipo. Por otro lado, por parte de la empresa dependiente del Gobierno central, Tragsa, no ha habido tampoco voluntad de satisfacer las lógicas demandas de la plantilla.

Ni la crisis sanitaria de 2020 sirvió para que la clase política tomara medidas que garantizaran un sistema sanitario realmente público y accesible, ni la ola de incendios de este agosto, la más destructiva de los últimos años, servirá para disponer de un cuerpo suficiente de profesionales que, por un lado, realice las tareas de mantenimiento y prevención necesarias, y, por el otro, sirva para combatir los incendios cuando éstos tengan lugar, para

así, gracias a todo ello, podamos proteger eficazmente nuestros montes y bosques. Esto no vendrá por voluntad propia de políticos de uno u otro signo sino que tan sólo con la convergencia de intereses de trabajadores y residentes, de las luchas en defensa del territorio con los conflictos laborales presentes en aquellos sectores ligados a éste, tan sólo con el encuentro y desbordamiento de todos estos conflictos podremos evitar volver a presenciar cómo nuestros espacios quedan completamente arrasados.

Nosotros ponemos los muertos

Los incendios durante este 2025 han dejado un total de 8 fallecidos, como siempre, trabajadores. En Soria, un centenar de personas convocadas por CGT se reunieron en un homenaje a su compañero fallecido que sirvió de denuncia de las condiciones laborales en el sector. Ignacio tenía 57 años y perdió la vida tras volcar el vehículo autobomba en el que viajaba para sumarse a las tareas de extinción en León. Abel Ramos, de 35 años, y Jaime Aparicio, de 37 años, primos y dos de las personas que se integraron en la red de voluntarios creada para completar el déficit de personal de la Junta de Castilla y León, también fallecieron en labores de extinción. A todos ellos, hay que sumar la muerte de un operario forestal de 58 años que, en su día libre, se desplazaba a participar en el operativo contra el incendio de Navalunga (Ávila); el bombero del Cuerpo de Agentes Forestales de la Generalitat fallecido en el incendio forestal en Paüls, Tarragona; y tres trabajadores del campo, del sector agroganadero, fallecidos en los incendios de Torrefeta (Lleida) y Tres Cantos (Madrid). A todos ellos, nuestro sentido y humilde homenaje.

Denuncia de intimidación y amenaza de desalojo del E.S.L.A. EKO

Desde el E.S.L.A. EKO denunciamos públicamente el inicio de un proceso de intimidación y amenaza de desalojo por parte del fondo Midtown Capital Partners, con la complicidad de servicios de desokupación y la colaboración de la Policía Nacional.

El edificio del EKO ha estado en concurso de acreedores durante más de una década. En noviembre de 2024, el fondo de inversión estadounidense Midtown Capital Partners –propiedad de Alejandro Vélez y Alexander Saiez– lo compró en subasta por un precio irrisorio. En el Estado español, su rostro es Alejandro González Molina. El modus operandi de este fondo de inversión ante casos como el del EKO es conocido. Ya lo hicieron en 2022, tras la compra del que se conocía como Edificio Dignidad en Móstoles¹, y lo repiten ahora en Carabanchel: compran barato para maximizar beneficios y, antes de iniciar procesos judiciales largos, inician una escalada de intimidación, presión, amenazas, coacción y violencia contra las personas que habitan el espacio para intentar recuperar el edificio de manera rápida y efectiva aunque ilegal.

En la madrugada del pasado 25 de agosto, hacia las cuatro de la mañana, un coche de la Policía Nacional con dos agentes recorrió varias veces las calles cercanas al EKO. Desde el coche se dirigieron a los compañeros que estaban en los alrededores con un claro tono de burla e intimidación, repitiendo desde el megáfono: «tic-tac, tic-tac, tic-tac...». Solo una hora más tarde, 5 hombres corpulentos y vestidos de negro fueron vistos merodeando de forma intimidatoria en torno al edificio.

Por motivos que desconocemos, aunque intuimos que la presencia de bastantes compañeros tuvo mucho que ver, se marcharon sin llegar a entrar. Horas después, la Policía Nacional identificó sin alegar motivo a once personas en la entrada del EKO, algo muy poco habitual en todos estos años de vida del centro social. A la siguiente mañana, el 26 de agosto, a las 9:17h se producen nuevas identificaciones. Cuatro agentes de paisano identifican a los compañeros que estaban cerca del espacio. No alegan más motivo que un escueto «son ordenes del jefe» y anuncian que se van a pasar todas las mañanas.

¹ <https://www.elsaltodiario.com/desahucios/alternativa-desalojan-bloque-dignidad-mostoles>

Nos quieren cansades, quemades, y rotes, pero van a encontrarnos fuertes y unides defendiendo nuestro espacio.

Sospechamos que este es el comienzo de un proceso de presión y acoso para intentar desalojar por la fuerza un espacio que lleva más de 14 años dando vida a multitud de proyectos y colectivos, redes de apoyo mutuo, cultura, resistencia y siendo punto de encuentro para tantas personas que habitamos y cuidamos el barrio de Carabanchel. Todo apunta a que esta campaña de presión quiere hacerse al margen de la legalidad ya que a día de hoy no se nos ha comunicado el inicio de ningún tipo de procedimiento de desalojo del espacio.

Esta situación forma parte de una oleada de ataques a centros sociales okupados autogestionados en Madrid que pretende borrar del mapa cualquier forma de autoorganización desde abajo en la ciudad y liberar todo el espacio posible para la especulación. Mediante el uso de la violencia a través de empresas de desokupación y con el respaldo de la represión institucional sólo en el último año, espacios como La Atalaya, La Ferroviaria o Vetades han sido desalojados o amenazados. No es casualidad, todos los edificios responden al mismo perfil: gran superficie en zonas y barrios en pleno proceso de gentrificación y especulación inmobiliaria. Como ocurre en muchas otras ciudades, los fondos de inversión han encontrado una quimera en el mercado inmobiliario de los barrios históricamente obreros como Carabanchel, donde aun les sigue siendo posible adquirir barato y en masa para vender o alquilar a precios elevados.

No somos intrusos. No somos desconocidos. Somos los vecinos del barrio de Carabanchel que han dado vida a un espacio que durante más de 14 años viene acogiendo asambleas, colectivos, conciertos, talleres, clases, redes de cuidados, apoyo mutuo, solidaridad y mucho más. Somos vecinos organizados en un espacio autogestionado, abierto y presente en el barrio. Lo sabemos: somos un problema y una molestia para el mercado financiero y la especulación inmobiliaria pero somos parte de la solución y la respuesta comunitaria a los vacíos y crisis que genera el sistema capitalista. No somos pocos. No estamos solos. Y no tenemos miedo.

Si quieres contactar con nosotres o estar al tanto de cómo evoluciona esta situación, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales:

Mail: eleko@eslaeko.net

Lista de difusión de Telegram [@ESLAekoDifusion](https://t.me/ESLAekoDifusion)

X: [@EKO_Carabanchel](https://x.com/EKO_Carabanchel)

Instagram: [@EKO_Carabanchel](https://www.instagram.com/EKO_Carabanchel)

Mastodon: [@eko_carabanchel@mstdn.social](https://mstdn.social/@eko_carabanchel)

O dejar un mensaje en nuestro buzón en el propio espacio (Calle Ánade nº 10). En este momento necesitamos más que nunca presencia física, fuerzas y solidaridad activa. Quieren echarnos, amedrentarnos, silenciarnos y no lo van a conseguir. Hacemos un llamado a todas las personas, colectivos y espacios aliados: acudid, estad atentas a las redes del espacio y difundid.

¡El EKO no se toca!

¡Midtown Capital fuera de nuestros barrios! ¡Fuera fondos, fuera matones!

Defendamos lo común. Contra la gentrificación, ¡lucha y autogestión!



Incendios, cambio climático y capitalismo

Este mes de agosto, durante una ola de calor que duró más de dos semanas, una serie de incendios –los más grandes jamás registrados– arrasaron, con total impunidad, el noroeste de la España Sacrificada: Asturias, Galicia, Trasmontes, León, Extremadura, Picos de Europa fueron envueltos en llamas. Joyas naturales como Las Médulas, la Serra do Courel, el Parque Natural do Invernadeiro y la Serra de Pena Corneira son un simple recuerdo. La inacción fue, una vez más, la tónica general de todos nuestros gobernantes, tanto los que tenían competencias medioambientales como los que las delegaron o se encomendaron a la lluvia –como hizo la ministra de Defensa– como solución ante el déficit de medios técnicos.

Olas de calor, cambio climático e incendios

Durante las olas de calor aumenta el potencial desecante de la atmósfera y nos encontramos con que muchas plantas se secan, por lo que liberan más energía al quemarse. Disminuye también la humedad en la hojarasca, facilitando la ignición y propagación del

incendio. Es decir, que por el cambio climático y la subida de temperaturas que le acompaña, las zonas más húmedas, que normalmente actuarían de cortafuegos, se vuelven tan secas como las de su alrededor.

Explica Eduardo Robaina, en la revista *Climática*, que “el cambio climático ejerce un control cada vez mayor sobre la meteorología de los incendios y la superficie quemada interanual, y está cambiando progresivamente la actividad de los incendios globales. En el caso de Europa, durante las últimas décadas (1980-2020) se está produciendo un “cambio sin precedentes” en el régimen de incendios en verano y primavera que se relaciona con los efectos del calentamiento global, según concluye un estudio recién publicado en la revista científica *Scientific Reports*. El aumento de las olas de calor y la sequía hidrológica, eventos extremos cada vez más habituales y potentes debido al cambio climático, son dos factores claves para desatar esos fuegos devastadores”.

Además, el estudio revela, entre otras cuestiones, que el área del Mediterráneo se calienta un 20% más rápido que el resto del mundo y que sus grandes cordilleras (Pirineos, Alpes, Sistemas Ibérico y Cantábrico, Apeninos, etc.)

corren un severo riesgo de arder enteros. Según las proyecciones, si la temperatura sube 2°C, habría 20 días más de riesgo de incendio extremo para 2100. En cambio, con un calentamiento de 4°C serían 40 días de riesgo por incendios forestales extremos.

Esto no es una cuestión menor, pues, según Robaina, “los bosques del continente europeo absorben anualmente cerca del 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, lo que se traduce en unas 360 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) por año. Esto es muy relevante pues los incendios dan lugar a ciclos de retroalimentación positiva del cambio climático: a medida que aumentan las temperaturas también lo hace el riesgo de incendios; los incendios liberan CO₂, que a su vez causa el aumento de las temperaturas. Mientras, las zonas boscosas arrasadas por el fuego son cada vez menores y la cantidad de gases de efecto invernadero que atrapan disminuye, lo que hace que aumente el calentamiento global. En definitiva, un círculo vicioso del que es muy difícil salir”.

Por otro lado, además de traducirse en más incendios, la menor disponibilidad de agua provoca el debilitamiento de las especies de cultivo y la propagación de enfermedades como hongos y



plagas, afectando a los niveles de producción. Además, la combinación entre altas temperaturas y de emisiones contaminantes eleva los niveles de ozono y, con ello, las enfermedades respiratorias, los problemas cardiovasculares y la productividad de los cultivos.

Cambio climático y capitalismo

La principal causa del calentamiento global es el cambio climático, pero

sino a causa de sus efectos políticos. Según Malm, inicialmente la máquina de vapor no era más eficiente o barata que los molinos de agua. Su generalización fue la consecuencia de una estrategia capitalista dirigida a concentrar los recursos productivos para, de ese modo, dominar las reglas del juego en los mercados de trabajo emergentes y controlar a la clase trabajadora.

Ser conscientes de que el cambio climático no es una suerte de condena contra «la humanidad», sino del capi-

mejorar los servicios públicos...medidas que permitirían unas zonas rurales vivas durante todo el año. Justo lo contrario de la tendencia actual: vaciar el mundo rural para poder aplicar el mantra extractivista escudándose en una inexistente transición energética.

Estamos asistiendo a la misma realidad que vivimos en las crisis del Covid, o en la Dana de Valencia. Crisis en las que, ante la insuficiencia de medios, la incapacidad y la desaparición del Estado, la solidaridad del pueblo surge para enfrentar el proble-

Estamos asistiendo a la misma realidad que vivimos en las crisis del Covid, o en la Dana de Valencia. Crisis en las que, ante la insuficiencia de medios, la incapacidad y la desaparición del Estado, la solidaridad del pueblo surge para enfrentar el problema.

es fundamental entender que éste viene provocado a su vez por el modelo de desarrollo capitalista. Sin la política de consumo desenfrenado y de crecimiento ilimitado del capitalismo, no existiría el cambio climático. De hecho, la historia del desarrollo económico y de la acumulación de capital desde la revolución industrial es la historia del cambio climático; puesto que el carbono que se emite a la atmósfera tarda siglos en diluirse, actualmente estamos sufriendo los efectos de las emisiones de combustibles fósiles que se llevan produciendo desde finales del siglo XVIII.

En el Estado español, las emisiones netas de CO₂ en 2021 se estiman en 254 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 6% respecto a 2020. El transporte es el primer factor que contribuye al calentamiento global, aportando el 29% de las emisiones totales a nivel nacional. Le sigue la industria, con el 21% de las emisiones. El actual modelo de agricultura y ganadería intensiva contribuyen con un 13% adicional a las emisiones de CO₂. Por último, la generación eléctrica aporta un 11% de las emisiones totales de CO₂ en España. No hay duda, pues, que las emisiones se deben al mantenimiento de un nivel de producción voraz, salvaje e insostenible.

Por ello, autores como Andreas Malm prefieren sustituir el término “antropoceno” (la constatación de la humanidad misma como fuerza autodestructiva del entorno geológico) por “capitaloceno”. Para Malm la disponibilidad de combustibles fósiles fue un factor esencial en la configuración del capitalismo histórico, no tanto por las posibilidades tecnológicas que abría,

talismo, es útil para que sepamos qué dinámicas debemos destruir y para aprender a decrecer de forma responsable, pero también para alejarnos de un marco de misantropía, de decir que el problema es «el ser humano» porque somos una plaga, que es una idea que a su vez lleva a la frustración y a la sensación de impotencia.

El negocio privatizador

“Es bien sabido que la gestión por parte de los políticos de turno de lo “público”, más bien “estatal” dado que lo único público que hay en dicha gestión es el dinero de nuestros impuestos, ha estado marcada desde hace décadas por lo que es: un inmenso negocio”, explican la Coordinadora en Defensa del Territorio, Aliente y el Observatorio de la Sostenibilidad en un comunicado publicado el 20 de agosto [lo hemos extraído del Portal Anarquista Oaca].

“Sea la educación, la sanidad, la atención a los mayores, o los incendios, en su gestión se abre una inmensa posibilidad de enriquecimiento para unos pocos. En todos los casos no es tanto un problema de insuficiencia financiera, sino más bien de a qué se dedican nuestros dineros.

Prevalece por tanto el interés particular: privatizar la extinción y repartirla entre todo tipo de empresas y, sobre todo, anular cualquier intento serio de desarrollar un sistema de prevención, dado que ello pondría en riesgo su negocio. Porque desarrollar un sistema de prevención implica abordar las causas de los incendios, vetar cualquier interés crematístico sobre la naturaleza y nuestros bosques, frenar la hemorragia de la despoblación, priorizar la producción agroecológica de proximidad, mantener y

ma. Desde los que han decidido permanecer en sus pueblos para defenderlos, hasta todos aquellos que en estos momentos están participando en labores de extinción o de apoyo a los afectados. Sin embargo, en los próximos días veremos movilizaciones en las que participarán algunos de los que son parte del problema. Aquellos que los propios bomberos forestales, los que se están jugando la vida mientras los políticos se lanzan improperios en un juego perfectamente calculado, denuncian que han apoyado el proceso de privatización¹.

Mientras, según expertos, el desastre de la planificación forestal nos acerca ya a los 8 millones de hectáreas quemadas en las últimas décadas. Hoy, tres años después del incendio y los muertos de la Sierra de la Culebra volvemos a la casilla de salida. No se ha avanzado absolutamente nada. La repoblación se está realizando por grupos al margen de las instituciones. Los servicios públicos siguen siendo recortados. La despoblación se ha incrementado. Los grandes proyectos de macrorenovables y todo tipo de industrias tóxicas o proyectos extractivistas invaden las zonas rurales. Mientras las temperaturas escalan y ya hemos sobrepasado siete de los nueve límites ambientales, el mantra del crecimiento sigue dirigiendo las políticas públicas en una carrera suicida hacia un destino pavoroso. No nos sirve este modelo económico, la prevención y la defensa de la naturaleza son incompatibles dentro del capitalismo”.

¹ Aquí se refieren al hecho de que los sindicatos oficialistas CCOO y UGT firmaron un acuerdo con la Junta de Castilla y León que dio carta blanca a la Administración para aumentar la privatización del Operativo de Lucha contra los Incendios, mantener la precariedad y temporalidad de los trabajadores y destruir el empleo de más de la mitad de las vigilantes de incendios de toda la comunidad autónoma.

Conversaciones con una refugiada palestina (segunda parte): oscuridad y luz

Nakba significa catástrofe. En mayo de 1948 el gobierno británico puso en marcha un plan para conceder a la población judía un estado propio. Comenzó así la expulsión de 700.000 personas y la destrucción de entre 400 y 600 poblaciones. La situación ha ido escalando los últimos 77 años. Los pueblos árabes fueron acorralados en lo que hoy llamamos Cisjordania y Gaza, espacios que van menguando con el paso de los años y son hoy el escenario del genocidio y la ocupación.

En 2006 el partido asociado a la organización Hamás ganó las elecciones por mayoría absoluta. Venció a Fatah, su principal rival fundada en 1958 por Yasser Arafat, y también a partidos minoritarios como el Frente Popular para la Liberación de Palestina (leninista y laica), La Alternativa e Iniciativa Nacional Palestina liderada por Mustafa Barghouti (secular) y que se presentó como parte de la lista “Palestina Independiente”.

La violencia sin tregua de las IDF (Fuerzas de defensa de Israel) no sólo coartó la vida diaria de miles de personas sino que han condicionado la forma del panorama político previo al inicio del genocidio más reciente y las posibilidades de organización social y de resistencia. Saja nos cuenta su experiencia organizativa.

Todo por Hacer (TxH): *Estábamos hablando de la represión en Tulkarm desde el año 2005. Los secuestros de familiares, las ejecuciones, etc.*

Saja: Sí. Hacen lo mismo con los chicos combatientes; si no pueden capturar a alguno, le dicen que tienen retenida a su madre o a su hermana o su hija. Saben cómo funcionan nuestras costumbres sobre la familia. En las cárceles, por ejemplo, las normas prohíben a las mujeres vestir el *hijab* o el *niqab* y tienen que ir sin nada. Estoy de acuerdo con cualquier chica que se quite el *hijab* porque quiere, pero no porque alguien se lo prohíba. Eso es lo que pasa ahora con las prisioneras. La situación de nuestras mujeres es muy difícil. Por ejemplo, durante su período menstrual, se quedan siete días con el mismo algodón. ¡Siete días! Esas son las normas.

TxH: *Eso es inhumano.*

Saja: Sí, no hay higiene en las cárceles israelíes. Y se ha agravado la situación tras el 7 de octubre.

TxH: *Otra manera de matar...*

Saja: Casi todos los prisioneros palestinos tienen problemas graves en la piel porque no tienen higiene básica. Imagina no poder ducharte en tres meses, o un mes, y solo tener tres minutos para hacerlo. Si te pasas un minuto más en la ducha, tienes un problema.

TxH: *¿No tienen agua para lavarse antes de orar?*

Saja: No, no. No me gusta hablar de ello, pero también han ocurrido casos de abuso sexual como otra herramienta de agresión. [Silencio] Espero haber respondido suficientemente bien.

TxH: *Una de las cosas que mencionaste [en la mesa redonda en la que participó en CNT Villaverde en 2024] también es que no tienes simpatía por Hamás ni Fatah. Pero, ¿tenías alguna alianza política mientras estabas allá?*

Saja: Me gustaría explicar esto. ¿Sabéis lo que significa “secular”? Es que tu religión está solo en la mezquita o iglesia. Para explicar los partidos políticos en Palestina hay que entender esto. Por ejemplo, Fatah es secular; Hamás, es islamista y exige que se practique su religión. Y también está la Jihad, que es como Hamás, pero no exige imponer prácticas en términos religiosos. Su visión es: “*Estamos luchando, simplemente defendemos Palestina. Y no es necesario compartir ninguna práctica religiosa en Palestina, solo la lucha*”. Además, tenemos como tres o cuatro partidos más. Son liberales y de izquierda. El principal es Jabha. Y también está Jabha Democrática, partidos democráticos. Y hay muchos partidos pequeños o bien de izquierda, o liberales, que son marginales y no es necesario analizarlos. Este era el panorama general en Palestina: existen Fatah, Hamás, Jabha Shabia, como opción secular y origen islámico o de izquierda y, en cuarto lugar, Jihad.

Yo no estoy con ninguno. Pero la verdad es que respeto a la Jihad. ¿Por qué? Porque no exigen práctica religiosa.

En 2006 se formó el Parlamento. La gente estaba cansada de Fatah, un partido acomodado, corrupto y que ya no lucha por la liberación nacional. Así que el palestino medio quiso probar otra opción y elegimos a Hamás. Los elegimos, pero nos mintieron y, después de eso, comenzamos a perder la confianza en cualquier partido. Este es el panorama en Palestina.

Soy un poco secular pero no estoy de acuerdo con Fatah, coincido más con las ideas de Jabha y respeto a Jihad, aunque no estoy con ellos.

TxH: *No sé si he entendido muy bien la propuesta de Jihad. He entendido lo que no hacen, pero no lo que hacen.*

Saja: Dicen que solo somos luchadores. Y solo defendemos Palestina. Porque estamos organizados.

TxH: *Como una milicia.*

Saja: No es una milicia, es una organización.

TxH: *Con el propósito de liberación. Pero, ¿es uno de sus temas no involucrar ideología? Por ejemplo, estamos en una situación que implica que no tenemos que discutir sobre ideología porque estamos inmersas en un contexto de ocupación y violencia y necesitamos militarizar y priorizar esto.*

Saja: Sí. Hamás, por ejemplo, diría: “*Como no tenemos ejércitos, no deberíamos estar luchando*”. Tienen muchos, muchos errores. No los respeto. La verdad es que no respeto ninguna práctica religiosa impuesta. En todo el mundo. Creo que estás de acuerdo conmigo.

TxH: *Sí.*

Saja: Así que, sí. Nos mintieron. En 2006 vieron el deterioro y corrupción de Fatah y prometieron un cambio. Y ahora tenemos una Palestina fragmentada porque Israel nos separó. Y Hamás continuó con eso.

TxH: *¿Y tú te involucraste en alguna organización?*

Saja: No exactamente. Apoyé más una persona que un partido. Se llama Mustafa Barghouti, fundador de Iniciativa Nacional Palestina o “Independientes”, una coalición de partidos y organizaciones independientes que tendría mucha más influencia sin el juego sucio partidista de Fatah y Hamás. Trabajé con ellos en una organización que es una suerte de Cruz Roja. Se llama *Palestinian Medical Relief Society*. Mustafa Barghouti visitó la Casa Árabe de Madrid en 2024.

TxH: *Entonces, estuviste involucrada con esta organización. ¿Cómo terminaste aquí?*

Saja: Estaba en la universidad. Me apunté para hacer trabajo comunitario

voluntario durante 50 horas. Tenía 24 años. Me sentó muy bien. Es como el comienzo de mi vida. Me siento parte de la organización.

TxH: *Entonces, ¿seguiste participando después de terminar la universidad?*

Saja: Y hasta ahora.

TxH: *¿Cómo es la militancia dentro de la Palestinian Medical Relief Society?*

Saja: Es vertical, bastante diferente de los movimientos sociales europeos, pero respetan a las mujeres y éstas participan activamente. Es una organización con jefes y varias son mujeres, lo cual ha animado a que varias compañeras militemos en ella.

sideraban “israelíes”. Desde luego, nuestro problema no es con su religión. Antes de 1948 teníamos muchos judíos viviendo y trabajando en Palestina. Y sé que, si eso llegara a pasar algún día, con reglas justas, creo que sería posible que ocurriera de nuevo. Muchos israelíes tienen doble nacionalidad. Si no quieren regresar a sus países de origen, entonces deberían quedarse con la nacionalidad israelí, renunciar a la otra y seguir las reglas de nuestro país palestino. Mi sueño sería que algún día eso pase. Pero, ahora, hasta los “ciudadanos normales” de Israel empiezan a tener armas para matarnos en Cisjordania. Su odio hacia nosotros va en aumento, como lo hace nuestro miedo.

na manera hasta Palestina. Las concentraciones y manifestaciones son útiles y el boicot es muy importante.

TxH: *Respecto a la violencia y las alianzas internacionales: el nivel de violencia es astronómico, pero hay personas en Europa que han ido a Palestina para ayudar pero no escuchamos muchas historias sobre brigadistas.*

Saja: Sí, hay muchas personas que vienen. Esto demuestra que hay falta de información, pero hay muchos activistas. Hace poco mataron a una mujer estadounidense-turca, Aysenur Ezgi, tenía 26 años y recibió un disparo en la cabeza de un militar israelí en septiembre de 2024. A Rachel Corrie,

"Ahora estamos en la temporada de la cosecha de aceitunas. Este es un momento crítico porque es cuando los colonos atacan a los palestinos que trabajan en sus tierras. La cosecha comienza en octubre y dura hasta diciembre. Los colonos aprovechan para atacar a los agricultores palestinos o les roban las aceitunas."

TxH: *Queríamos preguntarte tu opinión sobre las diferentes soluciones para Palestina que se han discutido en las últimas décadas: un Estado, dos estados... Antes del genocidio, había un debate sobre cómo resolver el problema del territorio. Pero todo esto es política teórica occidental, ¿verdad? Hablaban de la “solución” de dos Estados, que es dividir la tierra en dos países y conceder uno a los colonizadores sionistas. Y la solución de un solo Estado, con una autoridad, idiomas y religiones reconocidos.*

Saja: Debería existir un país Palestino con autoridad propia. Por supuesto, sin odiar a los israelíes o judíos que quieran vivir allí y respetarnos, porque conozco a muchas personas en Israel que no están de acuerdo con su gobierno y sienten vergüenza. Los gobiernos del mundo dicen que deberíamos tener dos territorios o dos países, pero ¿por qué? No podemos premiar a quien nos colonizó y no podemos vivir en un territorio con fronteras. ¿Por qué íbamos a necesitar una visa para visitar Jerusalén si es nuestra capital?

TxH: *Si Palestina fuera reconocida internacionalmente como el único Estado en esa región, ¿crees que sería posible incorporar a los israelíes razonables dentro de ese estado?*

Saja: Había judíos antes del apartheid en Palestina y no había ningún problema; incluso con los que se con-

TxH: *No creo que los sionistas puedan en ningún momento vivir con vosotros sin problemas. Creo que su ideología necesita el enfrentamiento.*

Saja: La sociedad israelí se fundó sobre el colonialismo y el supremacismo y, en los últimos años, la mayoría se está radicalizando. Pero eso no quiere decir que sea monolítica u homogénea. Hay muchas personas israelíes que están de acuerdo con lo que he dicho. Y muchos supuestos “israelíes” no están contentos con lo que está ocurriendo y están regresando a sus países de origen.

Por citar algunos ejemplos de colectivos críticos, existe un grupo llamado Neturei Karta (*Guardianes de la Ciudad*) que dicen saber que Palestina no es su tierra y que, si algún día quieren quedarse, no deben llamarlo Israel, sino la “Palestina ocupada”. Son conscientes de que, si quieren quedarse aquí, deben respetar las leyes palestinas.

Hay otro grupo en Israel llamado Peace Now (*Paz Ahora*) que creen en la solución de los dos Estados y que los israelíes no puedan atacar en cualquier momento a los palestinos.

TxH: *Y alianzas internacionales. En la mesa redonda nos hablaste sobre la importancia de las manifestaciones y el boicot económico.*

Saja: No creo que haya nada más que añadir. Las noticias llegan de algu-

estadounidense, la mataron en 2006 arrollándola con un bulldozer blindado. Sólo intentaba defender una vivienda palestina en Gaza.

Ahora estamos en la temporada de la cosecha de aceitunas. Este es un momento crítico porque es cuando los colonos atacan a los palestinos que trabajan en sus tierras. Hay activistas de todo el mundo que vienen a apoyar a los palestinos durante esta temporada. La cosecha comienza en octubre y dura hasta diciembre. Los colonos aprovechan para atacar a los agricultores palestinos o les roban las aceitunas. Los activistas vienen a defenderlos como buenamente puedan.

TxH: *Finalmente, sobre el sueño: ¿cómo imaginas una Palestina futura?*

Saja: No tengo propuestas de soluciones prácticas, espero simplemente una Palestina libre, con Jerusalén como capital, y poder moverme entre ciudades libremente. Porque ahora soy de Haifa, pero soy refugiada. Si quiero visitar Haifa, necesito una visa. Y si finalmente me dan un pasaporte español no me dejarán entrar porque ahora Israel tiene un problema con los españoles por las declaraciones que ha hecho el gobierno. Sé que es muy difícil ahora, pero tenemos un dicho en árabe que dice: “Después de la oscuridad, viene la luz”. Espero que la luz llegue al final de esta mala historia.

Hacia la abolición de las prisiones.

El desafío de una justicia antipunitiva

Estamos completamente habituadas a desayunar con la noticia de un crimen, la imagen del presunto culpable, el señalamiento del delito y la petición de más o menos años de cárcel por su comisión. Nos hemos acostumbrado a que el código penal se haga cargo de los conflictos sociales, a que estos se individualicen como asuntos interpersonales —violencias entre culpables y víctimas—, a que la única forma de abordarlos sea el castigo declinado mayoritariamente en penas privativas de libertad. Hemos naturalizado, en suma, la idea de justicia como venganza y la existencia de las prisiones.

Cada vez más alejadas de los centros de las ciudades, la realidad de las cárceles se mantiene invisibilizada. Cabría hablar de una banalización del encierro. Para tratar de salir de esta trampa queremos poner el foco, en primer lugar, en las poblaciones que hoy habitan las prisiones del Estado español y en su función social, para apuntar, después, formas antipunitivas de abordar las violencias sociales.

¿A quiénes encierran las prisiones?

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a diciembre de 2023 había 56.698 reclusos en este país. ¿Y quiénes son las personas encerradas en las cárceles del Estado español? Mayoritariamente, hombres extranjeros y pobres.

El 93 % de los reos son, efectivamente, hombres. Para entender esta desproporción de género cabe tener en cuenta, de entrada, que la asignación de las mujeres al ámbito reproductivo ha desplegado históricamente dispositivos específicos —culturales, psicológicos, religiosos, médicos...— para su control social. Además, las consecuencias del encierro no se circunscriben a quienes viven tras los barrotes. Así, entre las personas allegadas y familiares de los presos, las mujeres cargan de manera específica con el coste económico, social y afectivo de la prisión. Pero además, la socióloga Elisabet Almeda nos recuerda que España es uno de los países con más mujeres privadas de libertad de toda Europa: si la media europea se sitúa entre un 3 y un 4 % de mujeres respecto de la proporción al total de la población reclusa, la española prácticamente la dobla (el 7,1 % de presos son mujeres a diciembre de 2023).

En cualquier caso, para reflexionar sobre esta aplastante mayoría masculina ha-

bría que fijarse en la siguiente cifra: de las más de 56.000 personas encerradas en prisión a diciembre de 2023, el 16 % lo estaba por delitos relacionados con violencias sexuales. La dimensión de la cifra debería plantear un desafío a cualquier propuesta política emancipadora: el feminismo carcelario está ganando terreno y parece urgente reforzar un abolicionismo feminista que deje de asociar esta palabra prioritariamente a la guerra contra las trabajadoras sexuales para convertirse en sinónimo de lucha contra las prisiones, como sucede por ejemplo en EE.UU.

Las estadísticas de las prisiones nos indican también que el algo más del 31 % de la población reclusa en el 2023 eran personas extranjeras, según el Consejo General del Poder Judicial. Su número casi triplica el porcentaje de extranjeros en relación a la población total (12,7 %, según datos del INE de 2023), aunque el tanto por ciento de nacidos fuera de España asciende al 17 %. En estos mismos datos, se recoge que 4.000 personas de etnia gitana viven encerradas en las prisiones españolas, catalanas y vascas. Sin embargo, en España, según el Informe Foessa, viven en torno a 725.000 personas gitanas. Esto es, un escaso 1,52 % de la población es de esta etnia cuando entre la población reclusa su proporción asciende al 7 %. Por último, de acuerdo a un informe del defensor del pueblo, “cuatro de cada diez mujeres en prisión son de etnia gitana”, un tanto por ciento extremadamente elevado.

Para entender esta desproporcionada presencia de extranjeros y de población gitana entre las personas encarceladas, el dato crucial es que más del 43 % de los reos lo son por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico —contra la propiedad privada— y contra la salud pública —elaboración o comercialización ilegal de drogas estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en su mayor parte—. En efecto, como explica Mark Neocleous en Maderos, Chusma y orden social, la construcción del delito está estrechamente vinculada a la historia del capitalismo. Desde las «leyes terroristas» —término marxista— que entre los siglos XVI y XVIII criminalizaron toda posibilidad de sobrevivir al margen del régimen salarial, hasta la contrarrevolución neoliberal que aspiraba, en palabras de Margaret Thatcher, a «cambiar el corazón y el alma» de las personas para subordinarlos, diríamos nosotros, a la sal-

vaguarda de la propiedad privada. Y ya en plena crisis del propio neoliberalismo, en el año 2015 en el Estado español, asistimos a una reforma penal profunda que aumentó el castigo tanto de la pobreza como de la protesta. Esta fue la reforma que introdujo la prisión permanente revisable y otorgó una autonomía insólita al poder policial —mediante la popularmente conocida como ley mordaza— o identificó como actos terroristas conductas delictivas menores o incluso lícitas —como la posesión de determinados textos o la lectura de determinadas páginas web—, lo que Günther Jakobs llamó derecho penal del enemigo.

¿De qué nos sirven las prisiones?

Si los crímenes son, como acabamos de ver, una construcción histórica ligada a las necesidades de un sistema económico concreto —el capitalismo— ¿cuál es la función social específica de las prisiones dentro de una idea de justicia esencialmente punitiva? En su obra *Geografía de la abolición*, Ruth Wilson Gilmore explica cómo el discurso de ley y orden de finales de la década de 1960 se conjuga y declina, a partir de 1980, en un sistema industrial carcelario. La idea básica es que frente a la crisis de beneficio capitalista, el sistema económico se habría decantado definitivamente por el capital en detrimento del trabajo. ¿Resultado? Esto es el neoliberalismo, amigos: un Estado que abandona las antiguas funciones redistributivas del pacto fordista para reorientar sus instituciones de inversión pública hacia una gestión más represiva de las rampanes poblaciones excluidas.

¿Y cómo se traduciría esto en el estado español? Salvando las distancias —según estimaciones de Gilmore, el 50 % de la mano de obra en Estados Unidos estaría hoy sujeta a algún tipo de condena penal, algo lejos del caso español—, podríamos decir que el régimen del 78 desplazó en términos policiales la centralidad del orden público —eje de las políticas represivas durante la dictadura franquista— en favor de la seguridad ciudadana. Ello a partir de la nueva ley de policía del PSOE de 1986. La transición debía recorrer el largo camino desde un régimen político que castigaba y encerraba toda postura discordante con el orden ideológico impuesto, a uno destinado a velar por la denominada “seguridad ciu-

dadana”. Este concepto encierra, en buena medida, las profundas limitaciones que desde un punto de vista democratizador —lo que debería ser la distribución real de los recursos materiales y de la capacidad de decisión entre la población— caracterizan la transición española. ¿A qué nos referimos con “seguridad”? ¿Estamos hablando de la protección de contar con el acceso cotidiano a los bienes que hacen nuestras vidas posibles: casa, comida, salud, educación, libertad de movimiento, ingresos decentes? ¿A quiénes incluye hoy el concepto de “ciudadanía”?

El régimen del 78 llegó para seguir confrontando la inseguridad que inevitablemente generan la defensa de la propiedad privada y la economía capitalista. Una economía que, frustrada por la imposible recuperación de las tasas de beneficio de su edad de oro, comenzaba a renunciar —en los países llamados centrales— a la producción de bienes, para centrarse, fundamentalmente, en la creación exclusiva de dinero. Resultado: un capitalismo financiero con cada vez menos posibilidades de distribución igualitaria y cada vez más necesidades de exclusión. ¿Y cómo administrar sociedades en las que la porción de población excedente no deja de crecer? En la provincia española, al igual que en el resto del mundo, se destinan cada vez más recursos —simbólicos y económicos— al fortalecimiento del sistema penal: más código penal, más policía y más cárceles, en vez de más democracia, poder popular y condiciones materiales y simbólicas para una reproducción social posible y democrática.

Un paradigma de justicia, más allá del castigo y más acá de la justicia social

Si la composición social de las prisiones es un reflejo tanto de la desigualdad social que resulta del sistema económico, como de tendencias punitivas que están presentes incluso en movimientos, que, en un principio, se entienden como defensores de derechos, como el propio feminismo, el camino a seguir desde posiciones políticas de emancipación social debería ser cuanto menos, su decrecimiento y, como horizonte, su desaparición.

En este sentido, en el Estado español hay mucho por hacer. Es cierto que la tasa de ocupación de las prisiones españolas se sitúa entre las más bajas de Europa. No obstante, este es el único dato positivo del que puede presumir el gobierno español, pues todas las demás estadísticas dibujan un sobredimensionamiento de la respues-

ta carcelaria. Así, según del informe SPACE de 2023, en España hoy hay 119 presos por cada 100 mil habitantes, eso es, una cifra tres puntos superior a la media europea. Y su población reclusa pasa además más tiempo en prisión, en concreto 22,7 meses de media, frente a los 12,4 de la media europea. En los centros de la Administración General del Estado, la horquilla más frecuente de condenas es de entre cinco y diez años, sin embargo, en Europa va de los doce meses a los tres años, según datos del Ministerio de Interior. Por último, en España solo el 17 % de los internos cumple su condena en semilibertad, mientras que en muchos países europeos el régimen abierto se aplica a más de la mitad de los reclusos.



La impugnación que suele hacerse a los planteamientos antipunitivos y abolicionistas de la prisión es la de qué haríamos sin la cárcel para protegernos y curarnos de las violencias inevitablemente generadas por la vida social y las relaciones de poder que esta pone en juego. Además, tras un daño sufrido, las personas solemos necesitar reparación y las sociedades, restauración de los vínculos dañados. Por último, la ausencia de castigo se tiende a identificar con impunidad e indiferencia social frente a un agravio que, cuando es de calado —asesinato de algún allegado, por ejemplo—, acarrea consecuencias económicas, psicológicas y sociales difíciles de encarar.

Las respuestas a tales demandas no son sencillas y pasan por el desafío político, subjetivo, económico y social de transformar nuestro paradigma de justicia. Una apuesta que exige, en primer lugar, reconocer que la justicia entendida como castigo penal, no sirve en la práctica para los fines disuasorios, retributivos y rehabilitadores que justifican su existencia. Las cárceles no están habitadas por seres irreversiblemente malvados, sino en general, por personas especialmente perseguidas y convertidas en criminales reincidentes por unas leyes penales que satisfacen principalmente intereses de clase. Estas personas

cargan de forma individual con un castigo inseparable de sus causas sociales.

Si la sociedad como tal no se responsabiliza de manera colectiva de lo ocurrido y convierte, de manera tramposa, los conflictos en delitos, la reincidencia siempre será la única salida. ¿Por qué una persona X roba, viola, asesina? ¿Cómo podría hacerse realmente cargo del daño infligido? ¿Qué responsabilidades habría de asumir la sociedad respecto a una violencia acontecida y por su incapacidad de haberla evitado? ¿Cómo cabría superar el par víctima/culpable —ese binomio individualizante, mistificador y, sobre todo, inútil—, en términos de sanación y prevención? ¿De verdad alguien piensa que la reparación particular y colectiva de un daño se obtiene vía venganza? ¿Es el castigo pensado como aislamiento un dispositivo útil en términos de transformación emancipadora, tanto para el reo como para la sociedad en su conjunto?

Estas no son preguntas nuevas, sino que provienen de una tradición abolicionista de las cárceles que se originó hace mucho, como la criminología crítica abolicionista de las décadas de 1960 y 1970 en el norte de Europa, y que ha bebido y sigue alimentándose copiosamente de los feminismos negros abolicionistas y de los movimientos antirracistas en Estados Unidos —desde Critical Resistance hasta Black Lives Matter—. Una tradición que ha inspirado y producido dispositivos de justicia anticarcelaria tanto a la interna de los propios sistemas judiciales estatales (experiencias de mediación, conferencias y círculos, por ejemplo), como fuera de estos marcos institucionales (experiencias de justicia comunitaria en América Latina, en centros sociales de ciudades europeas y, en general, entre poblaciones para las que el recurso a la policía y a los tribunales no es una opción). Una tradición viva que urge conocer, declinar en prácticas situadas y desarrollar allá donde los conflictos forman parte de las relaciones sociales, es decir, en todas partes, desde los rincones más íntimos de nuestras convivencias domésticas hasta las calles, los espacios educativos, los movimientos sociales y las fronteras internas de nuestros barrios y ciudades.

Las cárceles no son reformables, pero sí son sustituibles por otras formas de prevenir las violencias, de acompañarnos en los daños sufridos y de abordar los conflictos sociales e interpersonales que no nos expropian de nuestra capacidad de autogobierno de los mismos.

Marisa Pérez Colina.

Publicado en: zonaestrategia.net

Repaso de algunos casos represivos de actualidad

En verano, las que podemos, nos regalamos unas semanas de pausa y desconexión. No por la bondad de nuestros jefes, sino gracias a los siglos de lucha obrera que nos han permitido conquistar derechos como unas semanitas de descanso estival. Sin embargo, no porque nosotras detengamos nuestro ritmo, el mundo hace lo propio con el suyo: ni la vida se detiene, ni tampoco la represión estatal que tan rutinaria nos parece. Por ello, al reincorporarnos, nos damos de bruces con la dura realidad de que la libertad de varias compañeras corre peligro por su labor activista. Vamos a hablar de algunos ejemplos.

Detenidas por solicitar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza

Según un informe de la organización Defender a quien Defiende, el movimiento social que sufrió más persecución en 2024 fue el propalestino. Y todo apunta a que 2025 será igual.

El pasado 28 de julio, un centenar de personas se concentró frente a la embajada de Egipto en Madrid para exigir al Gobierno de El-Sisi que abriera el Paso de Rafah y permitiera la entrada de camiones cargados de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Según relatan varias asistentes, la policía empezó a identificar a manifestantes al azar y, cuando algunas pidieron explicaciones, comenzaron los empujones y las identificaciones, bajo el pretexto de que estaban incurriendo en desobediencia o, incluso, en agresiones a agentes de la autoridad. En total, cinco personas de distintas edades y procedencias resultaron detenidas y podrían enfrentarse a acusaciones que comportarían elevadas penas de prisión.

Detenidas por protestar contra la presencia de Israel en la Vuelta ciclista

Las protestas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech, propiedad del multimillonario Sylan Adams (amigo y aliado político de Netanyahu) están siendo todo un ejemplo de lucha popular, pese a que desde algunas instituciones y medios de comunicación se esté intentando criminalizar a las activistas diciendo que “mezclan política con deporte”. Con el paso de los días y el discurrir de las etapas, las protestas de activistas y espectadores contra el genocidio en Gaza van en aumento. Los cortes de carretera ocurridos en Catalunya

y la movilización masiva que obligó a los organizadores a suspender el final de etapa en Bilbao han conseguido colocar el foco del debate político sobre la competición ciclista.

El paso por Asturias y Galiza no ha sido menos, con una gran movilización contra la presencia del equipo sionista en la carrera. Sin embargo, allí la Guardia Civil ha respondido con cargas, porrazos y detenciones. Al cierre de esta edición, doce activistas han sido detenidas cerca de Oviedo por sujetar una pancarta y encadenarse entre sí para bloquear el paso y otras diez en Monforte de Lemos y O Corgo por hechos similares. Y a la competición todavía le quedan algunos días para terminar, incluyendo su final en Madrid.

Detenida una manifestante antitaurina en Palma

El 7 de agosto se celebró una concentración de unas 150 personas en el Coliseo Balear de Palma de Mallorca, en cuyo interior se estaba asesinando a un toro en una corrida. En un momento dado, un grupo de nazis se acercó a las manifestantes y comenzaron a insultarles y tirarles cosas, sin que la policía interviniera para pararles. Acto seguido, la policía avanzó hacia las manifestantes y lesionaron a cuatro compañeras, deteniendo a una de ellas, a la que acusan de agredirlas.

Tras salir en libertad, la compañera anunció que se está planteando presentar una denuncia contra los agentes por detención ilegal y lesiones.

Los 6 de Zaragoza cumplen 500 días en prisión

En enero de 2019, se celebró un mítin de Vox en Zaragoza. Cientos de antifascistas acudieron a protestar contra el acto y se

produjeron algunos disturbios y enfrentamientos contra la policía. Seis chavales acabaron siendo detenidos por estos hechos y, pese a que no se podía individualizar su conducta concreta, fueron condenados como “coautores” de los hechos. Los cuatro mayores de edad detenidos recibieron penas de 4 años y 9 meses de prisión, mientras que a los dos menores se les impuso una libertad vigilada.

En el momento en el que escribimos este texto, los cuatro adultos llevan 511 días entre rejas. Han transcurrido también más de 500 días desde que pidieron el indulto de los cuatro chicos, del cual no se ha recibido respuesta alguna por parte del Ministerio de Justicia. Tampoco ha acordado el Ministerio del Interior el régimen de semilibertad o tercer grado penitenciario que han solicitado.

Las 6 de la Suiza siguen privadas de libertad

Mejor suerte están teniendo las compañeras de CNT Xixón que fueron condenadas por acudir a una serie de piquetes en el marco de un conflicto laboral con la pastelería La Suiza. Ingresaron en el Centro Penitenciario de Asturias a principios de julio y, al poco tiempo, fueron clasificadas en tercer grado, por lo que se encuentran en un régimen abierto en un Centro de Inserción Social anexo a la cárcel.

Las compañeras pueden salir por el día y deben volver al CIS a pernoctar, por lo que no viven con plena libertad y su grupo de apoyo ha anunciado que las movilizaciones continuarán. Sobre todo, porque – al igual que sucede con los compañeros de Zaragoza – el Gobierno no ha resuelto la solicitud de indulto, por lo que resulta imprescindible hablar del caso, visibilizarlo y presionar a las autoridades, para hacer decantar la decisión hacia el lado de las trabajadoras y no de la patronal.



[Ensayo] Un poder carcelario

Autor: José Navarro Pardo. Prólogo: Iñaki Rivera. Virus Editorial. Barcelona, 2025. 256 páginas.

Con unas cotas elevadas de visibilidad mediática y una influencia creciente en los aparatos judiciales y políticos, los sindicatos y asociaciones de funcionarios de prisiones son hoy un actor decisivo a la hora de entender los procesos de criminalización y producción de pánicos morales y paranoias securitarias. Responsables directos de la aplicación de los derechos de las personas presas, sus reivindicaciones se basan en el dismantelamiento de dichos derechos, y en la implementación de un modelo de cárcel-guerra que deshumaniza a la población reclusa, al tiempo que criminaliza a sus familias y a los grupos y entidades que les brindan apoyo.

José Navarro, investigador del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) especializado en los derechos de las personas presas, analiza en este libro cómo bajo siglas de sindicatos mayoritarios o asociaciones corporativas, estas estructuras están dirigidas y atravesadas por destacadas figuras de la ultraderecha ligadas a una praxis de abuso y violencia, que han disfrutado de una tradición de impunidad y que han respondido con furia a los intentos de denunciarla o eliminarla. Esto lo conoce bien Iñaki Rivera, director del OSPDH y prologuista de este ensayo, quien fue denunciado por sindicatos de funcionarios de prisiones e investigado por la Justicia por explicar en TV3 que se pro-

ducen torturas y malos tratos en las prisiones catalanas. Por fortuna, el procedimiento judicial acabó archivado (y, además, un funcionario acabó condenado por proferir amenazas leves contra Rivera), pero sirvió como aviso a navegantes para quienes pretendan denunciar la tortura y defender a los presos.

El poder carcelario de estas organizaciones se inserta hoy en una nueva matriz punitiva en la cual los derechos han sido sustituidos por una «gestión de riesgos» que da vía libre a un mayor dominio y represión sobre las vidas de las personas presas. Estos sindicatos han acumulado una notable capacidad de producción simbólica e influencia política, factores que son analizados en este trabajo, en una aportación fundamental para el conocimiento de un ámbito generalmente opaco y desconocido.



[Documental] Recuperar o monte

Dirigido por Rafael Xaneiro. Producido por Verdegaia. Galiza, 2024. 38 minutos. En gallego

El documental *Recuperar o monte* muestra cómo las vecinas organizadas pueden convertirse en un agente clave en la defensa del territorio y la biodiversidad. La obra se centra en la experiencia de las Brigadas Deseucaliptizadoras, un movimiento de voluntariado y activismo ambiental nacido en Galicia en 2018 con un propósito claro: combatir la expansión del eucalipto y de otras especies exóticas invasoras, al tiempo que se recuperan espacios de monte vecinal para usos comunitarios y sostenibles.

El relato se construye a partir de imágenes de las brigadas en acción, testimonios de activistas ecologistas y vecinas, y la voz de miembros de comunidades de montes en mano común. El documental ilustra cómo, cada fin de semana, decenas de personas se organizan para arrancar brotes de eucalipto, cortar ejemplares jóvenes o retirar acacias, trabajando codo con codo con los comuneros locales. Esta labor no solo tiene un efecto directo sobre el terreno, muy importante en el contexto de los devastadores incendios que hemos vivido este verano en lugares como Ourense, León o Zamora, sino que también refuerza la conciencia colectiva sobre la necesidad de repensar el modelo forestal gallego, históricamente orientado hacia la explotación intensiva del eucalipto.

Uno de los puntos fuertes de la obra es su capacidad para mostrar el contraste entre el monte dominado por monocultivos de especies invasoras y aquel que, tras la intervención voluntaria, empieza a regenerarse con frondosas autóctonas, más resistentes a incendios y más valiosas desde el punto de vista ecológico. El documental evidencia que la lucha contra los eucaliptos no es solo un gesto simbólico, sino un esfuerzo práctico, continuado y con resultados visibles.

A lo largo de la narración se destaca también la dimensión social de las brigadas: su carácter abierto y horizontal, la diversi-

dad de edades y perfiles de las personas participantes, y el espíritu festivo y solidario que impregna las jornadas de trabajo. El monte se convierte así en un espacio de encuentro, cooperación y aprendizaje colectivo.

El filme pone de relieve que recuperar el monte no significa únicamente restaurar un ecosistema, sino también rescatar una relación comunitaria con la tierra, basada en la corresponsabilidad y la sostenibilidad. Además, el documental explica cómo esta iniciativa ha trascendido las fronteras gallegas, participando en proyectos europeos y recibiendo reconocimiento en foros científicos y sociales.

Recuperar o monte es, en definitiva, una invitación a la acción. Muestra que la degradación ambiental puede revertirse cuando existen voluntad colectiva, compromiso y organización, y que cada persona, con su esfuerzo, puede contribuir a transformar el territorio y a construir un futuro más habitable.

Se puede ver el documental completo en www.todoporhacer.org/recuperar-o-monte y www.portaloaca.com/videos/documentales/documental-recuperar-o-monte/



[Documental] Infiltrada en el búnker

Director: Pablo De La Chica, 2025, 1h 36min, Disponible en Amazon Prime

“Hola, soy yo, Carlota. Perdona por desaparecer, pero todo se ha acelerado y necesito hablar contigo. Ya conoces mi situación de testigo protegido, y te pido por favor que, cuando termines de escuchar este mensaje, lo borres. No me fío nada de esta red.”

Así comienza el documental que narra la historia de cómo la activista Carlota Saorsa se infiltró en Vivotecnia durante 18 meses. En abril de 2021 se publicaron unas imágenes estremecedoras del interior del laboratorio, en las que se evidenciaba el trato que recibían los animales. El documental relata cómo Carlota fue contratada como técnica de laboratorio y logró trabajar allí durante 546 días, registrando lo que ocurría —y, lamentablemente, sigue ocurriendo— en ese lugar. Es la primera vez que se obtienen imágenes desde el interior de un laboratorio en el Estado español, además de tratarse de la infiltración más larga de este tipo jamás realizada.

La narración fluye con el ritmo de un thriller, sin caer en exageraciones. Y es que el lobby de la experimentación animal puede resultar verdaderamente aterrador. Las imágenes de los animales han sido cuidadosamente seleccionadas para permitir que el público comprenda la historia; aunque son duras y dolorosas para cualquiera con un mínimo de sensibilidad, el enfoque narrativo permite continuar con el relato.

Pablo de la Chica, director y productor, ha trabajado junto con Carlota y un amplio equipo durante cuatro años para revelar la realidad de un laboratorio de experimentación animal que, por desgracia, no se diferencia de otros. La principal diferencia es que, de Vivotecnia, tenemos imágenes; de los de-



más, todavía no. Durante los 96 minutos de duración, es fácil ponerse en la piel de Carlota, que por motivos de seguridad ha sido interpretada por la actriz Goize Blanco. A día de hoy, Vivotecnia se encuentra inmersa en un proceso judicial y Carlota es testigo protegido.

Se agradece que, aunque brevemente, el documental también contextualice la lucha por la liberación animal mediante entrevistas con otros activistas.

Actualmente puede verse en Prime Video, que —por motivos que aún desconocemos— ha decidido financiarlo. Suponemos que se debe a que es una historia nunca antes contada y, como suele ocurrir, la realidad supera la ficción. Una verdad muy oculta que merece ver la luz, y que ha puesto nervioso al lobby de la experimentación animal, que ya está rabiando por que todo esto se sepa.

[Ensayo] 27 de septiembre 1975 / los últimos fusilamientos de la dictadura franquista

Autor: Plataforma abierta “AL ALBA”, El Garage Ediciones, Septiembre de 2025, 388 páginas.



Este libro, elaborado en base a recuerdos y testimonios directos de sobrevivientes, abogados, familiares y luchadores antifascistas de la época, narra la historia de los cuatro últimos consejos de guerra de la Dictadura franco/fascista contra un grupo de resistentes que derivaron en los últimos fusilamientos llevados a cabo en un espacio del ejército español el 27 de septiembre de 1975.

En condiciones de Dictadura, el terrorismo es la Dictadura y la resistencia a la Dictadura es la lucha anti-terrorista del pueblo. En condiciones cualesquiera de Tiranía, la Tiranía es terrorismo y luchar contra la Tiranía es luchar contra el terrorismo.

Las fuerzas armadas, policiales y para-policiales que han establecido primero y mantenido después la Dictadura o la Tiranía son las bandas armadas, uniformadas y no uniformadas, del terrorismo. El ejemplo español es paradigmático. 40 años de dictadura terrorista, tras un golpe de estado y una guerra desencadenada por el ejército convertido en una fuerza terrorista que tras haber derrotado a las fuerzas democráticas de la II República, prolongó esa misma guerra a través de una dictadura.

La Dictadura, como terrorismo de Estado, resulta el más peligrosos y destructivo, pues su violación permanente y sistemática de todos los Derechos Humanos afecta cotidianamente a toda la población de la manera más grave y en todos los ámbitos de la vida pública y privada, familiar,

laboral, colectiva, social, política...

Consecuente con su forma de actuar, el Estado Terrorista acusa de «terrorismo» a todos aquellos que, con absoluta legitimidad, se le resisten y enfrentan activamente. En este sentido, el comportamiento de la Tiranía se asemeja al del ladrón que, para evitar ser acusado, grita señalando a su víctima: ¡al ladrón, al ladrón!

El miércoles 17 de septiembre se presentará este libro en la Fundación Anselmo Lorenzo (c/ Peñuelas 41, Madrid) y se inaugurará una exposición sobre los últimos fusilamientos de la dictadura.

[Podcast] La Linterna de Diógenes

Llega septiembre, se acaba el verano y toca volver al curro, a los atascos o al transporte público, a perder el tiempo recorriendo esta maldita ciudad persiguiendo un salario. Una mierda, vamos. Pero al menos también vuelven los podcasts y los programas de radio que nos amenizan estas tristes mañanas, al menos a mí. Y si hay un podcast que destaque en esa titánica tarea de hacer de las mañanas de transporte algo menos deprimente, ese es “La Linterna de Diógenes”, que acaba de dar comienzo a su decimonovena temporada. Una delicia que en cada programa

nos permite acercarnos a un tema de historia social, luchas políticas actuales o ciencia de la mano del profesor Arkadio y sus entrevistados/as. En esta ocasión, la nueva temporada arranca con un programa titulado “Tecnología chimpancé” en el que participa la investigadora de la Escuela de Antropología y Etnografía de la Universidad de Oxford Alejandra Pascual Garrido, que actualmente se encuentra estudiando chimpancés en una reserva natural de Tanzania. A lo largo de una hora, esta entrevista nos sumergirá en cómo los chimpancés, nuestros parientes más

cercanos, idean, manufacturan y usan herramientas para sus necesidades diarias, ante todo las relacionadas con la alimentación, y cómo en todo ello se interrelacionan procesos cognitivos, culturales o de profundo conocimiento del medio. Este estudio del mundo tecnológico de estos primates también nos abre una puerta al conocimiento de nuestro propio pasado evolutivo en relación al uso de herramientas, un conocimiento que tenemos limitado por las evidencias que perduran en el tiempo, es decir, la piedra como punto de partida.



Número 176

Tirada: 1.500 ejemplares

Mail: todoporhacer@riseup.net

Telegram: t.me/ToDoPorHacer

Más información:

www.todoporhacer.org

Apoyo Solidario:

ES16 0049 6704 55 2190128999

Durante los últimos catorce años puede que te hayas encontrado con el periódico mensual *Todo por Hacer*. Esta publicación nace en 2011 con la ilusión por sacar adelante un proyecto autogestionado que contribuya a visibilizar nuestras posturas anarquistas en papel y de manera gratuita, dos características esenciales de este proyecto que, aunque conllevan sus dificultades, tienen ventajas fundamentales como son una cierta perdurabilidad, la difusión “mano a mano”, la presencia física en la calle, etc.

Alejándonos de la inmediatez de los medios digitales, tratamos de dar prioridad al análisis sobre la novedad, dar difusión a noticias que vayan más allá de un mero titular, que contextualicen y que mantengan su vigor aun con el paso de las semanas.

Nuestra opinión pretende situarse al margen de la ideología del sistema. Contaminadas/os por ella, insistimos en superarla y derrumbarla, en derrumbar al sistema mismo y construir entre todos y todas una sociedad donde la autoorganización, la solidaridad y el apoyo mutuo sean los postulados esenciales para la vida en libertad.

El periódico que presentamos aspira a ser un mínimo ejemplo de la capacidad que todas tenemos para llevar a cabo nuestros proyectos sólo con esfuerzo y motivación. Y toda ayuda es bienvenida, ya sea colaborando con la financiación, con la distribución en la calle o en redes sociales. Para cualquier sugerencia, crítica, ayuda, etc. no dudes en escribirnos.



"Apoyo a Palestine Action", la frase que te puede llevar a la cárcel

El pasado mes de julio, el Gobierno laborista británico, con el apoyo de liberales y conservadores, aprobó una ley por la cual declaró a Palestine Action una organización terrorista. Este colectivo, fundado en 2020, lleva cinco años organizando protestas pacíficas de diversa índole, como sentadas y bloqueos delante de las oficinas de Elbit Systems (empresa armamentística israelí), pintadas en las sedes de las manufactureras de armas UAV Tactical Systems (franco-israelí) y Leonardo (italiana), la vandalización de un retrato de Arthur Balfour en Trinity College y el robo de dos bustos de Chaim Weizmann de la Universidad de Manchester. Su acción más grande, que es la que le ha granjeado el calificativo de "terrorista", fue la invasión de la base militar aérea RAF Brize Norton y el sabotaje a dos aviones Airbus Voyager con pintura y palos, el pasado mes de junio.

Desde la ilegalización del colectivo, miles de personas han sido detenidas en distintas manifestaciones por portar pancartas con la leyenda "Apoyo a Acción Palestina". El guionista Paul Laverty fue detenido en Edimburgo a finales de agosto por llevar una camiseta que decía "Genocide in Palestine, time to take Action". El 6 de septiembre, 890 personas fueron detenidas en una concentración en el centro de Londres (857 de ellas acusadas de enaltecimiento del terrorismo por portar pancartas de apoyo a la organización y 33 por delitos contra el orden público), lo cual supone el mayor caso de detenciones masivas en la historia del Reino Unido.

Dos días después, una obra del grafitero Banksy apareció en la fachada del Tribunal de Londres, apoyando a las detenidas. En el mural aparece un juez dando mazazos con saña a un manifestante, que se intenta proteger con su pancarta. La Justicia ha anunciado que lo borrará para mantener el decoro del edificio.